

Asunto: Derecho de acceso a la información pública

Nº Expte.: 001-084164

Fecha: 21/12/2023

#### ANTECEDENTES DE HECHO

1- Ha tenido entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa solicitud de Dña. XXX (NIF XXX) de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) y que ha quedado registrada con el número 001-084164.

2- Recibido el escrito en esta Dirección General, como Centro Directivo a efectos de resolución, indicándose por la Unidad de información de Transparencia del Ministerio de Defensa que el plazo máximo para resolver es de un mes, que comienza a computar a partir del 5 de diciembre de 2023, tal y como dispone el artículo 20.1 de la Ley 19/2013.

3- En la referida solicitud se requiere lo siguiente:

“Solicito información sobre el protocolo de actuación ante un ataque aéreo.

En concreto, sobre los siguientes puntos:

1. Cuál es el protocolo de evacuación de los ciudadanos.
2. El despliegue militar pertinente.
3. Si hay habilitados refugios antiaéreos donde resguardarse antes dichos acontecimientos, si es así donde se encuentran en la ciudad de Valencia. Y si no los hay, donde se refugiarán los ciudadanos”.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) establece el derecho de acceso a la información pública, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”, entendiéndose por información pública a la vista de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley LTAIBG, “los contenidos y documentos, cualquiera que sea su formato o soporte que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

2- Analizada la solicitud, se observa que la misma hace referencia a tres cuestiones diferenciadas y que exigen valoraciones distintas.

3- La primera y la tercera de ellas tienen que ver con el requerimiento de información del protocolo de evacuación de los ciudadanos y con el hecho de si existen habilitados refugios antiaéreos donde resguardarse antes dichos acontecimientos, si es así, donde se encuentran en

la ciudad de Valencia y, caso de que no los hubiera, se identifique el lugar en el que se refugiarán los ciudadanos.

No corresponde a este Ministerio responder a dichas preguntas.

Así, el artículo 34 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil atribuye al Ministro del Interior el desarrollo de las normas de actuación en materia de protección civil, la elaboración de la Norma Básica y planes de Protección Civil de ámbito y competencia estatal, así como la superior dirección, coordinación e inspección de las acciones y los medios de ejecución de los planes de protección civil de competencia estatal.

Además, la primera de las inquietudes de la interesada pudiera haber sido duplicada por ésta al Ministerio del Interior, departamento al que correspondería dictar la resolución al efecto por lo que no se hará ninguna valoración al respecto por nuestra parte.

Y respecto a la tercera, en esta Dirección General no obra la información solicitada, desconociéndose, además, el órgano competente que pudiera conocer tales datos, aunque, a nuestro juicio, parece posible que lo fuera alguna Administración de orden estatal, autonómico o local de la zona referenciada por la propia interesada.

Esta circunstancia resulta ser una causa de inadmisión a trámite de la solicitud prevista en el apartado 18 d de la LTAIBG “Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente”, por lo que correspondería actuar del modo y manera indicado en el párrafo 2 del citado precepto: “En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud”.

4- El segundo petitum de la interesada atinente al despliegue militar que corresponde en un supuesto de evacuación, merece un pronunciamiento específico por esta Dirección General de Política de Defensa, habida cuenta de que, como antes se ha dicho, la documentación, o, al menos, parte de ella, obra en nuestro poder.

Ahora bien, la obligación de dar información en este caso viene limitada por la propia LTAIBG en términos de defensa y seguridad. Y es que, el artículo 14 de la norma establece que “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para a) la seguridad nacional; b) la defensa;...”

También se hace referencia a que, “la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

En este sentido expuesto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el criterio interpretativo CI/002/2015 indica que los límites a la información a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter personal, no operan directamente de una forma automática ni absoluta, sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, “podrán” ser aplicados justificando y motivando la denegación en su caso conforme a las reglas y elementos de ponderación que exige la norma en la toma de la decisión.

Por tanto, la invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo. Para ello, deberá

analizarse, test de daño, si la estimación de la petición de información supone un perjuicio concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información.

Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).

Los conceptos tanto de defensa como de seguridad nacional son cuestiones reguladas, respectivamente, por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, pudiendo apreciarse que la información requerida afecta directamente a la seguridad presente y futura de España, pudiendo comprometer sus relaciones exteriores.

No cabe duda que el hecho de informar acerca de los despliegues militares y los planes y procedimientos del Sistema de Defensa Aérea frente a ataques aéreos supondría un perjuicio para la materia señalada toda vez que la información solicitada se encuentra amparada por lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley 9/1968 de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, y al Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de esa ley, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994. De esta forma, el acceso a dicha información queda limitado a los órganos y las personas debidamente facultadas para ello y con las formalidades y limitaciones legalmente establecidas, no pudiendo por tanto ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizar su contenido fuera de los límites legalmente establecidos, dado que su conocimiento por personas no autorizadas podría dañar o poner en peligro la defensa del Estado.

Esta limitación de acceso de documentación responde a su fin propio, como se refleja en la exposición de motivos III, párrafo quinto, de la LTAIBG, que expresamente indica: “Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información – derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.

En el caso que ahora examinamos, la posible restricción de acceso a la información solicitada no se basa en la aplicación arbitraria o exorbitante de una norma con el fin de sustraer al conocimiento público cierta información, sino en que la documentación requerida contiene información del desarrollo de las operaciones por parte de las Fuerzas Armadas, cuya difusión podría comprometer, en estos momentos, aspectos referentes a la propia seguridad y defensa nacional. Tal y como expresa el párrafo precedente, se debe ponderar el interés protegido con el interés público de la divulgación, que ni en la instancia remitida parece acreditado, ni se considera por parte de este órgano que tal información tenga ese interés.

## RESOLUCIÓN

Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Política de Defensa considera denegar e acceso a la información solicitada a por Dña. XXX (NIF XXX), por estar clasificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

El Director General de Política de Defensa

Fernando José López del Pozo